

Capítulo 1

La búsqueda de un desarrollo alternativo

Henry Veltmeyer

¿Fin de una era?

Del modernismo al posmodernismo

ESTAMOS, se ha dicho, en el umbral de una nueva era. Esta era, también se dice, está caracterizada por la transformación, que define una época, de las formas dominantes de organización socioeconómica, la globalización de prácticas y procesos concomitantes, y nuevas formas de pensar los problemas del mundo y, en general, de analizar la sociedad.

A finales de los cincuenta, varios sociólogos (C.W. Mills y Daniel Bell, entre otros) escribieron acerca del fin de la era moderna y de la llegada de otra: posmoderna, posindustrial, poscapitalista. La era moderna, según la entendieron y concibieron, se basaba y caracterizaba por la búsqueda del Iluminismo: el análisis científico de las leyes que gobiernan el funcionamiento de la economía y una mejor forma, si no perfecta, de sociedad en la que las personas podían realizar plenamente su potencial humano. Tal desarrollo era visto como el resultado de un “proceso”, y por ello sujeto a fuerzas que pueden entenderse y manipularse pero no ser controladas, o como el resultado de un “proyecto”, realizado merced a la adecuada acción sobre los principios racionalistas y las ideas universales de la libertad, la razón y la igualdad. La modernización así concebida ha implicado un agudo proceso de lucha para superar los obstáculos que se oponen al progreso económico, justicia social y democracia, son éstas las tres dimensiones críticas de la sociedad moderna y del proceso emancipatorio que conlleva su consecución.

Desde muchos puntos de vista, esta imagen –y la noción de una forma de sociedad posmoderna, posindustrial y poscapitalista– era un tanto prematura, dado el desenvolvimiento en esa época del proceso económico internacional en términos de crecimiento, desarrollo y modernización. Visto en retrospectiva, sin embargo, estas primeras voces podrían ser vistas como preclaras, al presagiar los desarrollos y formas de ver que surgieron o se hicieron aparentes décadas después. En cualquier caso, en los ochenta hubo muchas adicio-

nes, y permutaciones, a esta noción –la era posmoderna– que condujeron a repensar radicalmente el proceso o proyecto del desarrollo económico y social. Había desaparecido la creencia del Iluminismo en la idea del progreso, los principios universales de los derechos humanos inalienables, el ideal de una forma racional de sociedad y de Estado en el que reinarían la libertad y la justicia: una comunidad de individuos libres e iguales, capacitados y con el poder (*empowered*) para realizar su potencial humano.

Ciertamente, no hay un consenso en este punto. Por un lado están aquellos que permanecieron convencidos tanto de la necesidad como de la posibilidad de los cambios radicales necesarios para instituir los principios racionalistas y los ideales de la libertad, la igualdad y el progreso –para culminar el proyecto de modernización iluminista del siglo XVIII. Después de todo, existía amplia evidencia de un creciente abismo de desarrollo en el mundo, y un incremento significativo en las inequidades sociales, en la proporción de los frutos del desarrollo apropiados o gozados por una pequeña minoría privilegiada y las grandes masas de personas, inmersas en la pobreza y la miseria, excluidas de estas islas de prosperidad y bienestar. Por otro lado, había un desencanto igualmente difundido y un creciente coro de voces (y todos los instrumentos y el poder del Estado-nación) que se elevaban, objetando y negando, en rechazo tanto de la posibilidad como de la necesidad del cambio radical o revolucionario. La consolidación y el ajuste del sistema existente, y su globalización además de otros procesos –en vez de la revolución social–, se proyectaban aquí como la meta del proceso de desarrollo. Y entre estos dos puntos de vista, ambos llevados a sus extremos, proliferaban las voces en la búsqueda de otra forma de desarrollo y una manera alternativa para hacer análisis.

En el centro de esta búsqueda estaba la noción de que el desarrollo era a la vez posible y necesario, pero que debía concebirse y ser puesto en práctica en términos muy diferentes. El desarrollo, se argumentaba, debería reconocer la heterogeneidad radical de la experiencia, la existencia de caminos múltiples hacia el desarrollo, la comunidad como la base del proceso implicado, y a las personas mismas como la única agencia efectiva para el cambio.

La crisis del modelo dominante

Un modelo es una simplificada representación teórica de la realidad que hace posible el análisis y proporciona un marco de ideas para la construcción de la teoría. Los economistas y sociólogos han construido una cantidad de modelos y teorías con el propósito de explicar los principales patrones del desarrollo

internacional. Estos patrones son complejos y están sujetos a las más diversas formas de interpretación.

Primero, es posible identificar profundos cambios en la organización económica y social, asociados con –aunque no causados por– la revolución tecnológica que ha transformado a las formas disponibles de comunicación, la naturaleza de la sociedad, el sistema de producción global y las posibilidades de resolver las necesidades básicas de los pueblos y realizar el potencial humano. Todavía se debate acerca de las fuerzas que impulsan estos cambios y desarrollos. Pero no hay duda sobre la centralidad e importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el marco de políticas para posibilitar las medidas de estabilización y de ajuste estructural involucradas. Tampoco hay duda respecto de la necesidad de cuentas equilibradas y disciplina fiscal, la liberalización (del comercio en bienes, servicios y capital), la privatización (de los medios de producción), la desregulación (de la actividad económica), y de la reducción en la escala (del Estado y la empresa capitalista: *downsizing*). Estas medidas constituyen los elementos clave del modelo neoliberal, al que también se le puede designar como nuevo modelo económico (NME), diseñado por los economistas de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM) y que hoy es puesto en práctica a lo largo de la región (Bulmer-Thomas, 1996; Green, 1995; Veltmeyer y Petras, 1997).

Este modelo y sus reconocidos logros tienen un obvio lado flaco. Las diferencias entre el norte y el sur en el desarrollo han crecido a lo largo de los años a pesar de las impresionantes tasas de crecimiento económico y de desarrollo social mostradas por una cantidad de países en Asia oriental. Han proliferado las desigualdades sociales y las inequidades del crecimiento encabezado por el mercado y se han excedido los límites ecológicos del crecimiento económico y de la industrialización, conduciendo a un deterioro drástico, si no fatal, del ecosistema subyacente y a un proceso de crecimiento insostenible.

Por un lado, el orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial que ha generado estos desarrollos negativos se ha renovado con la institución de lo que en América Latina y en otros lugares se etiqueta como el NME. Por otro lado, hay poca o ninguna duda del progreso, según lo conciben aquellos quienes proponen la modernización. Pero no se ha materializado el prometido progreso en términos de justicia y equidad, crecimiento y desarrollo, modernización y promoción del desarrollo humano. Sin embargo, dentro del marco del NME, la falta de tal progreso no es vista como una falla. Es vista como una evidencia de que la noción de justicia social y el ideal asociado de una sociedad sin clases –una comunidad de individuos libres, iguales y con

poder de actuar (*empowerment*)¹ –son abstracciones de la realidad, un ideal utópico imposible de realizar. El NME, se piensa, crea el mejor de todos los mundos posibles, en el que no hay tanta (o en absoluto) igualdad y justicia social sino una libertad individual y una distribución eficiente de las recompensas sobre la base de la productividad: a cada cual según su contribución (a la producción).

En este contexto, el colapso del socialismo, según se realizó en la Unión Soviética y en otras partes del bloque socialista, se ve como si significara el triunfo del capitalismo de libre mercado, y con él la idea de la libertad individual institucionalizada en la vestimenta de la democracia liberal. Al mismo tiempo, para una cantidad de intelectuales, esto significa el fin de la creencia en el concepto iluminista del progreso universal y el posible estado de la justicia social. De hecho, las certidumbres intelectuales y las creencias e ideologías de movilización vinculadas con el proyecto de emancipación, modernización y desarrollo, han sido abandonadas. Según lo expresa Lyotard, un exponente de esta perspectiva posmodernista, lo que caracteriza a la posición intelectual emergente es el “escepticismo y la desconfianza de todas las meta-narrativas”, una desconfianza de todas y cada una de las representaciones teóricas de la realidad en forma estructuralista.

A lo largo de los últimos 50 años, el concepto “desarrollo” ha sido objeto de innumerables reflexiones, estudios, reformulaciones y críticas. Para algunos, el concepto conserva la marca de sus orígenes en los ideales de la Ilustración de emancipación y progreso universal, su creencia subyacente en la razón humana y los ideales de progreso, libertad y justicia social. Sin embargo, para Esteva, Prakash y otros autores que proponen el “posmodernismo de las bases” o el contradesarrollo, el error obvio del proyecto de desarrollo, a pesar de décadas de esfuerzo concertado, planeación a largo plazo y el desarrollo conducido por el mercado, significa que el desarrollo es una empresa abortada tanto en la teoría como en la práctica. Lo que se necesita, se argumenta, es que cada pueblo, con referencia a sus propios valores y sobre la base de la acción autónoma y las organizaciones de base, teja sobre sus propios tejidos culturales y construya así su propio futuro. Esta construcción social de la realidad –cuyas condiciones son más subjetivas y políticas que objetivas y estructurales o económicas– no está basada en principios universales abstractos, el discurso

¹ El vocablo *empowerment* ha sido traducido al español, en algunos casos, como empoderamiento, y en otros, como apoderamiento. Pero en todos los casos se refiere a la creación de poderes alternativos ya desde la sociedad civil, ya desde la ciudadanía organizada, ya desde las comunidades de base, pero en todo caso se trata de la apropiación del poder (N. del T.).

racionalista o las grandes narrativas del pensamiento modernista –el universalismo de los derechos humanos, la noción del individuo autónomo, el idealismo de la democracia y el internacionalismo o globalismo liberal (o socialista). Los esfuerzos del “pueblo” (“hombres y mujeres ordinarios que se autoorganizan de manera autónoma para lidiar con su predicamento”), en los contextos culturales específicos más diversos, para ajustarse a las condiciones que afectan y condicionan sus vidas, escapan a la “monocultura de la modernidad” (Esteva y Prakash, 1998: 3). Esta construcción social tiene un nuevo centro de referencia: una épica emergente de las bases sobre la lucha localizada, el drama de las formas cotidianas de resistencia y una “amplia colección de iniciativas y luchas culturalmente diversas de las llamadas «masas» no-modernas, analfabetas y carentes de educación (...) siendo pionera en los caminos radicales posmodernos para salir del vértigo de la vida moderna” (Esteva y Prakash, 1998: 3).

Entre estas dos respuestas a la crisis del proyecto de desarrollo de la posguerra, el neoliberalismo y el posmodernismo de base o contradesarrollo, existe un amplio rango de aproximaciones y escuelas de pensamiento diversas unidas sólo por su compromiso compartido con una forma alternativa de desarrollo. En este compromiso no hay unidad. Lo que define las diversas concepciones del desarrollo alternativo es el reconocimiento y valorización de la diferencia radical: la noción de que el desarrollo en sus diversas dimensiones es heterogéneo y que puede y debería tomar múltiples formas; que los pueblos deberían construir su propio desarrollo sobre la base de la acción autónoma de organizaciones basadas en la comunidad, locales o de base; que el desarrollo debe ser participativo en forma, humano en escala y centrado en el pueblo.

A pesar del respeto que se le ha dado y los compromisos con los principios de la heterogeneidad y la diferencia culturales, hay patrones observables en esta búsqueda de desarrollo alterno. Incluso se ha afirmado que todas las aproximaciones novedosas hacia un desarrollo alternativo comparten una visión del mundo, y que en efecto constituyen un “nuevo paradigma”. Si éste fuera el caso, ¿cuáles son sus elementos constitutivos? ¿Hay declaración de principios comunes, definibles, que guíen el pensamiento y la acción? Sobre la base de estos principios, ¿es posible formular o identificar uno o más modelos teóricos que puedan ser utilizados para representar la realidad? ¿Qué teorías, si es que las hay, se han construido sobre la base de estos principios y dentro del marco de estos modelos?

Modelos de desarrollo alternativo

La búsqueda del desarrollo alternativo (DA) ha alcanzado las proporciones de un importante movimiento social de organizaciones no gubernamentales (ONG) que pueden ser cuantificadas en decenas de miles a escala global. Actualmente, y en todas las regiones del mundo, es posible encontrar varios puntos nodales en la búsqueda del DA en la forma de un grupo de investigación, un programa de actividades y una revista que proporcione un canal de exposición de investigación en colaboración, declaraciones programáticas y noticias. Un ejemplo de este tipo de organización es el Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Cultural (Inauco) y su *Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal* (RIDAA), editada por la Universidad Autónoma de Madrid. Otros ejemplos son la Fundación Dag Hammarskjöld, con sede en Estocolmo; la Society for Alternative Development, y la revista *Development Dialogue*, todas las cuales se remontan a 1974, al constituir, en efecto, una primera piedra en el movimiento para establecer una forma alternativa de desarrollo. Hay que considerar además a la Confederación Latinoamericana de Cooperación y Mutuales de Trabajadores (Colacot), en Santa Fe de Bogotá, Colombia; Equipo Pueblo, en la ciudad de México; la Red de Desarrollo Alternativo, y su revista *Interculture*, en Montreal, Canadá; la International Foundation for Development Alternatives (IFDA), y su *IFDA Dossier*; y varias agencias operativas de las Naciones Unidas, en particular el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (IINUDS), cuyas conferencias y publicaciones a lo largo de los años han sido instrumentales en la propagación de la idea de una forma participativa de desarrollo basada en la comunidad, conducida por el pueblo y centrada en el pueblo.

Max-Neef y el desarrollo a escala humana

Sobre la base de este desarrollo organizacional e institucional se ha generado una cantidad de intentos por construir un modelo basado en la comunidad y una forma participativa de DA. Uno de tales intentos está asociado con las ideas de Manfred Max-Neef, economista chileno cuyas reflexiones y trabajos en el “desarrollo a escala humana” constituyen un importante punto de referencia en la búsqueda del DA (*La economía descalza* (1986), publicada por vez primera, en inglés, en 1982, por la Fundación Dag Hammarskjöld con el título *Human-Scale Development*). Las reflexiones de Max-Neef se basaron en sus experiencias como consultor internacional con comunidades campesinas indígenas en la sierra y las regiones costeras de Ecuador y con los artesanos negros en una microrregión de Brasil.

Max-Neef (1989) deriva varias enseñanzas de estas reflexiones sobre el proceso de desarrollo en Ecuador, Brasil y otros lugares. Primero, con referencia a la perspectiva de Schumacher sobre “la economía como si la gente importara” (*Small is Beautiful*), argumenta que es de importancia crítica para los economistas escapar o ir más allá de:

- la obsesión por el tamaño y la preferencia tendenciosa por la gran escala;
- la obsesión por la cuantificación y la medida, que conduce a que no se aprecie la centralidad y se sopesa el papel crítico de los factores morales no estructurales, culturales e intangibles en el proceso de desarrollo;
- la aproximación mecanicista y técnico-administrativa a las soluciones teóricas basadas en una orientación hacia la racionalidad científica, el progreso tecnológico y la administración;
- la tendencia a simplificar y cosificar las condiciones críticas del proceso de desarrollo, con la asociada falta de comprensión de la necesidad de una visión moral, un sentido de la historia y una apreciación de la complejidad social;
- la tendencia a analizar y teorizar categorías esenciales y formas de desarrollo (el trabajo doméstico de las mujeres, las actividades de subsistencia de los pobres, etcétera), cuyas condiciones culturales –y estructurales– se hacen invisibles; y
- la incapacidad para reconocer el antagonismo y la falta de equilibrio que se da con frecuencia entre las formas culturales existentes de organización socioeconómica y el ecosistema subyacente.

En términos de tales consideraciones, Max-Neef defiende una forma de desarrollo a escala humana basada en el equilibrio entre la integración de los valores humanos y los límites naturales (humanismo integral ecológico).

Luis Razeto y la economía de solidaridad

Luis Razeto, economista chileno vinculado con el Programa de Empleo Regional (Prealc) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Santiago, Chile, ha escrito prolíficamente estudios que constituyen puntos críticos de referencia en la búsqueda regional del DA. Estos estudios incluyen *The Economy of Solidarity and the Democratic Market* (Razeto, 1985); *Crítica de la economía, mercado democrático y crecimiento* (1985); y *De la economía popular a la economía de solidaridad en un proyecto de desarrollo alternativo* (1993).

En estos estudios, Razeto explora algunas variaciones sobre el mismo tema. Entre ellas están diversas formas de acción y la organización autónomas formadas dentro de la sociedad civil, una esfera de la acción y la organización

sociales que puede diferenciarse tanto del Estado como del mercado, las dos instituciones críticas en la mayoría de los modelos teóricos del desarrollo económico. Según lo ve Razeto, la emergencia y la construcción de una vibrante sociedad civil como una arena independiente de lucha, acción y organización, fue una respuesta a condiciones de crisis económica que alcanzaban a toda la región a principios de los ochenta y las onerosas operaciones del Estado y el mercado, que crearon fuerzas y condiciones más allá de la capacidad de control del pueblo. La emergencia de esta sociedad civil está asociada con el crecimiento de un movimiento popular, la formación de organizaciones de base y no gubernamentales, y el impulso para democratizar las instituciones existentes, al igual que para expandir los espacios locales para el poder de decisión sobre temas de desarrollo con importancia para la gente ordinaria y sus comunidades.

Las preguntas centrales, planteadas y abordadas por Razeto, son:

- las formas de acción y organización iniciadas dentro de la sociedad civil son capaces de superar las condiciones de marginalidad y pobreza que las hicieron surgir;
- estas organizaciones populares son capaces de generar las fuerzas sociales con la capacidad de convertirlas en agencias de desarrollo colectivo; y
- las economías de solidaridad establecidas en el proceso han logrado el dinamismo suficiente como para constituir un modelo de desarrollo.

El primer punto establecido por Razeto es que la economía de la solidaridad creada por la acción y la organización autónomas de los pobres en las ciudades, ocupantes de un creciente “sector informal”, es una respuesta defensiva a una situación de extrema necesidad. La gran variedad y diversidad de tales respuestas, anota, hacen difícil evaluar y determinar el grado de efectividad de tales actividades y organizaciones. En muchos casos, las actividades económicas o las operaciones de intercambio económico no están mediadas por el dinero; no están concretadas en mercancías ni están monetizadas. Tampoco están basadas completamente, si es que lo están de algún modo, en el cálculo racional del propio interés o la propia ganancia. En muchos casos las actividades económicas están dictadas por las condiciones sociales de solidaridad, o por la costumbre de compartir y distribuir colectivamente los recursos escasos, y son motivadas por un sentido de comunidad o solidaridad. El objeto de la actividad económica es resolver las necesidades básicas de subsistencia y hacerlo sobre la base de lazos de solidaridad comunal.

Otro problema abordado por Razeto es si, y cuándo, una economía de solidaridad puede insertarse en las estructuras más amplias de la economía de mercado y del Estado al igual que en el proceso de globalización. El problema, en otras palabras, es el de moverse en la teoría y en la práctica de lo local a lo global. ¿Puede operar una economía de solidaridad en una escala mayor que la local? ¿Puede constituir un modelo de desarrollo nacional? A estas preguntas, sin embargo, Razeto no proporciona respuesta alguna.

Jaroslav Vanek y Abraham Guillén:

la economía de la autoadministración de los trabajadores

La economía de la participación del trabajador y la autoadministración es la estrategia óptima para los países subdesarrollados y proporciona un modelo útil para los países industrializados. Ésta es la conclusión a la que arriba Jaroslav Vanek en un estudio publicado en 1974, un año que vio nacer una cantidad de iniciativas hacia las que se remonta la actual búsqueda mundial por DA. La estrategia formulada por Vanek sobre la base de diversos experimentos y experiencias apoyadas por el gobierno en Yugoslavia y otros lugares tiene varios requerimientos y condiciones:

- la autodeterminación interna y externa en la esfera política;
- la autodeterminación económica que implica la autoadministración de los trabajadores dentro de la empresa y la existencia de un mercado que funciona efectivamente sin recurrir a la compulsión más que en circunstancias excepcionales; y
- la generación de sobreproducto al igual que una distribución equitativa de los recursos productivos y los frutos del desarrollo entre los miembros de la comunidad.

Sobre este punto de Vanek ha habido innumerables estudios, pero la experiencia con empresas de propiedad social en Chile bajo el régimen de Salvador Allende (1970-1973) ha sido particularmente instructiva. Los estudios de esta experiencia conducidos, entre otros, por Espinosa, un colaborador chileno de Vanek y Zimbalist, autor de la clásica *Economic Democracy* (1978), apoyaban en general el argumento presentado en numerosos estudios de Guillén (1988, 1993, etcétera), quizá la principal figura intelectual y teórica asociada con Inauco y su revista RIDAA. La tesis de Guillén es que la autoadministración del trabajador es la clave y una condición esencial de una forma alternativa (esto es, socialista) de desarrollo, el mejor, si no es que el único

medio, de que la gente en los países en desarrollo se convierta en sujeto de su propia historia.

Sin la participación popular, añade Guillén, no podría haber una democracia plena o auténtica; sin la administración colectiva por los productores directos o los trabajadores no se puede escapar de la alienación del trabajo; sin un control directo sobre los medios de administración, el Estado se sitúa de manera inevitable por encima de la sociedad en los intereses de la clase dominante o elite. En breve, sin la participación de los trabajadores en la administración de la producción, la democracia económica basada en la propiedad social, al igual que en la democracia política, el Estado sigue siendo un instrumento de dominio de clase y no de desarrollo colectivo por los ciudadanos del gobierno y del Estado (Guillén, 1993: 66-67).

Roberto Guimarães: cooperativismo y equidad

Un punto crítico de partida para las reflexiones de Guimarães y otros sobre la experiencia latinoamericana con el cooperativismo es una serie de estudios y reportes comisionados por la UNRISD, coordinados por el teórico colombiano de la acción social, Fals Borda, y publicados en 1974. Sobre la base de una extensa investigación de campo y de estudios de caso, estos reportes concluían que las cooperativas en general no eran formas efectivas de organización en lo que concernía a responder a las necesidades básicas de los pobres y como una agencia para la transformación social. En esa época era frecuente que se supusiera que el desarrollo efectivo requería, y se basaba en, un cambio institucional o en la transformación social radicales, y de una superación de las estructuras sociales y políticas de la producción económica. A este respecto, las cooperativas eran claramente deficientes, una conclusión que difiere radicalmente de las lecciones que otros estaban derivando de experiencias tan diversas como las de Mondragón con cooperativas de trabajadores a mediados de los cincuenta² y las de Antigonish con cooperativas de productores en Nueva Escocia.

² Mondragón, situado en la región vasca española, es el grupo mayor y de más éxito entre las compañías que son propiedad de los trabajadores. Las ventas anuales son de 4,800 millones de dólares y el 39 por ciento de sus ventas industriales fueron exportaciones. De 80 cooperativas altamente productivas, 70 son industriales, emplean a 29,000 personas y producen una amplia gama de bienes y servicios. En este complejo, gobernado e integrado democráticamente, de firmas de alta tecnología, los trabajadores-propietarios se benefician de salarios y apreciación del capital, seguridad en el trabajo, extensa educación técnica y reentrenamiento ocupacional. Una compañía industrial es la mayor productora en España de bienes de consumo duradero (refrigeradores, estufas, aparatos eléctricos) y la quinta más grande de España en cuanto a manufactura. El complejo incluye una gran cadena de supermercados, cooperativas de agricultura, de construcción y de servicios, un banco de desarrollo comunitario, escuelas técnicas y un sistema de servicio social.

La conclusión general a la que llega el equipo de la IINUDS, y en gran parte apoyada por Guimarães, quien trabaja ahora en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, sobre la base de una experiencia subsiguiente y extensa con el movimiento cooperativo en América Latina, puede sintetizarse en tres enunciados:

- las cooperativas no son agentes para el cambio, puesto que producen pocos beneficios para los sectores más pobres de la población; efectivamente, el fortalecimiento de las cooperativas en la mayoría de los lugares condujo a un incremento inexplicable en los diferenciales de ingresos;
- las cooperativas tienden a reproducir la estructura de las relaciones y condiciones de la comunidad en vez de transformarla; y tienden a reforzar, al igual que a extender y profundizar, las desigualdades sociales existentes previamente; esta situación puede estar relacionada en parte con la tendencia de los grupos y los individuos que han encontrado acomodo en la estructura del poder al controlar los comités clave y la administración de las cooperativas; y
- en los pocos casos en los que las cooperativas realmente estaban compuestas y representaban los intereses de los campesinos pobres, eran claramente incapaces de promover los intereses de sus miembros (Guimarães: 285-286).

El elemento sorprendente en la revisión de Guimarães de las cooperativas como un factor de desarrollo en América Latina es la obvia presuposición en muchos estudios previos acerca de que las cooperativas podrían o deberían constituirse en agentes del cambio social, lo que en el contexto y discurso contemporáneos es denominado “transformación social”. Es bastante claro que, al igual que muchas de las ONG, en el movimiento cooperativo de los ochenta (véase el estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) reseñado por Guimarães, 1989: 290, 292, 295-298) las cooperativas nunca fueron establecidas u organizadas con este propósito. La estrategia de desarrollo que proponían estas cooperativas se caracterizaba en general por el respeto a la institucionalidad del sistema económico existente y dominante, por la búsqueda del desarrollo dentro de los intersticios del modo capitalista de producción. Lo mismo podría decirse de la ola de ONG formada en los ochenta bajo condiciones muy diferentes de crisis económica y de un proceso de redemocratización. Algunos de los ensayos de este libro exploran este tema.

A discusión, en diversos intentos por entender el papel de las cooperativas en el proceso de desarrollo, está la estructura de su organización interna y su orientación política. Como se ha dicho, las cooperativas en general operan dentro del marco institucional del sistema económico dominante. Sobre

esta base, los medios de producción colectiva no están socializados; tampoco la empresa es administrada colectivamente. Sin embargo, esto no es así cuando las cooperativas de trabajadores se instituyen en relación con el Estado como sindicatos. Esto se aplica, por ejemplo, al caso de la Asociación de Mujeres Autoempleadas (AMAE), un sindicato cooperativo de mujeres pobres autoempleadas en Ahmedabad, India, que ha tenido un éxito manifiesto, no sólo al promover los intereses de los más pobres entre los pobres sino también al promover un cambio social efectivo. Esto también se aplica a aquellos sindicatos cooperativos que se han unido bajo la sombra de la Colacot, en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Al igual que otras organizaciones similares, Colacot opera con un modelo de economía social, una “economía de trabajo” basada en las variaciones de los siguientes cuatro principios:

- la supremacía del trabajo sobre el capital;
- la propiedad social, en una forma u otra, de los medios de producción;
- una asociación de productores directos; y
- autoadministración colectiva de la empresa.

En el nivel de los principios y en el de la organización interna, los temas están bastante claros. El problema es determinar cómo y bajo qué condiciones tal organización se relaciona y opera en términos tanto del sistema económico más amplio como del Estado. Este problema también es abordado por algunos estudios en este libro en un contexto más contemporáneo de las condiciones de la América Latina actual.

IIINUDS: la participación como apropiación social del poder (*empowerment*)

La participación es un término que apareció por primera vez en el discurso del desarrollo a finales de los cincuenta. Los promotores del desarrollo comenzaron a notar que la gente común era excluida casi por completo de la formulación y puesta en práctica de los proyectos de desarrollo. Se pensó que la inclusión de la población local incrementaría la eficiencia que llevaría a la mejora del desarrollo. Esta visión de la participación se acepta ahora ampliamente por parte de la mayoría de las ONG, los gestores del desarrollo e incluso los gobiernos nacionales. De hecho, en la actualidad se le toma como una cuestión de principio tanto en lo que respecta a la ejecución y el diseño de los proyectos de desarrollo como en el proceso en su totalidad. Es así como el concepto de “participación” sirve como una herramienta primaria para la

evaluación de proyectos del BM y otros financiadores y agencias de ayuda (Blaikie, 1985; Cernea, 1987).

Sin embargo, existe una concepción alternativa de la participación, que no es tratada como lo hace el BM –como un medio de asegurar una mayor eficiencia y efectividad en los costos de diseño y puesta en práctica de proyectos– sino como una forma alternativa de desarrollo que es a la vez socialmente fortalecedora (de la gente involucrada) y transformadora (de la estructura institucional más amplia de la sociedad).

En la primera perspectiva, la agenda de desarrollo está predeterminada, los objetivos son definidos y las soluciones se anticipan mucho antes de que la gente local tenga la oportunidad de comenzar a participar. En la segunda perspectiva, propagada por académicos como Anisur Rahman y, en el contexto latinoamericano, Fals Borda entre muchos otros, el desarrollo participativo requiere sin embargo la transformación social y conduce a la apropiación social del poder (*empowerment*). Esta perspectiva fue ampliamente difundida en algunos congresos organizados por IINUDS en los setenta y ochenta, pero no se consideró una perspectiva por sí misma sino hasta finales de los ochenta, cuando, para muchos practicantes y académicos, desplazó la perspectiva del BM, la CEPAL, y otras organizaciones de ese tipo en la corriente dominante del pensamiento y práctica del desarrollo.

En la visión dominante, sin embargo, la creciente participación en el proceso de desarrollo es vista como una responsabilidad primaria de los gobiernos, los cuales, en sociedad con las ONG, todavía son vistos como la principal agencia ejecutora para el desarrollo. Desde la perspectiva del DA, empero, el desarrollo participativo se ve como una estrategia que se ha de poner en práctica no desde arriba y afuera, sino desde abajo y adentro; esto es: con la gestión de organizaciones sociales de base o con fundamento en la comunidad. En esta visión se necesita que la gente se incorpore en el proceso de desarrollo al frente y en el centro y desde el inicio –al definir el problema, identificar posibles soluciones y finalmente proceder a la acción. Estos académicos han sido instrumentales en la emergencia de técnicas de investigación, como la participativa investigación-acción que encarna esta visión. Sobre esto, véase, en particular, Fals Borda, un exponente desde hace tiempo de la “investigación-acción”.

El desarrollo participativo (DP) no es un proyecto sino más bien un proceso sin un marco temporal definido. La meta del DP es una forma de sociedad descentralizada, no autoritaria y humanista, que sea ambientalmente sustentable y esté basada en un sentido de comunidad real. Una aproximación de DP también da cuenta de, o cuando menos reconoce, los temas del poder

y del privilegio dentro de las comunidades o grupos, y también con cualquier persona externa que podría ser parte del proceso. Esta forma de desarrollo está diseñada para que se origine desde el sur, y para que sea transformadora tanto de los sistemas como del participante. La participación en este contexto es, o puede ser, una forma de apropiación de poder cuando toma en cuenta los desafíos de las estructuras externas; la agenda no está predeterminada y sigue siendo un concepto radical. Si se torna simplemente en una herramienta para poner en práctica objetivos predeterminados, la participación es únicamente una técnica insidiosa para mantener una agenda reformista.

CEPAL: la participación como el eslabón perdido en el proceso de desarrollo

Ninguna institución ha sido tan central como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para conducir a la oposición en América Latina a un modelo neoliberal de desarrollo capitalista y a la búsqueda de una forma alternativa de desarrollo. Por más de 50 años, los economistas de la CEPAL han debatido los principios neoliberales y las prescripciones de políticas sobre la base de un modelo estructuralista (y neoestructuralista) de la economía. Sin embargo, este modelo, en sus varias reformulaciones, tiene fundamento en la institucionalidad del sistema capitalista: la propiedad privada de los medios de producción, la relación social del trabajo asalariado, el mercado y el Estado. El propósito ha sido dar al proceso de desarrollo capitalista una dimensión social al igual que una cara humana: “crecimiento con equidad”, en una formulación previa, “transformación productiva con equidad”, en una más reciente (CEPAL, 1990).

La clave para el modelo de la CEPAL en su formulación estructuralista más reciente (Sunkel, 1993) es la noción de la “participación” como un “eslabón perdido” en la cadena de “transformación productiva-equidad” implicada en el proceso de desarrollo. En este modelo la “equidad” es requerida y puede lograrse en dos niveles: acceso a los recursos productivos de la sociedad y la distribución de los frutos del desarrollo. El propósito es ampliar la base social del proceso productivo; incorporar a un espectro social tan amplio como sea posible, incluyendo al campesinado, las comunidades indígenas y los operadores de las empresas en el sector informal que son excluidos completamente del proceso de desarrollo en el modelo neoliberal.³

³Stiefel y Wolfe (1994). El modelo neoliberal está orientado primordialmente y dirigido hacia estas empresas a gran escala que son capaces de ajustarse bien a los cambios en la economía mundial y que son capaces de insertarse en el proceso de globalización bajo condiciones competitivas, que se calculan en 15 por ciento del total. Incorpora también una categoría de empresas y de unidades de producción que se considera tienen “capacidad productiva”. Por lo tanto, se calcula que un 50 por ciento

Los capítulos 2 y 3 analizan algunas variables críticas del modelo de la CEPAL, en específico el mecanismo de la participación popular y el proceso de la descentralización institucional. Y el capítulo 5 (Aquevedo sobre Chile) analiza más profundamente las políticas introducidas por el régimen de concertación de los demócratas cristianos y los socialistas en Chile y el apoyo al modelo de la CEPAL. La clave de este modelo es la noción de que los productores y grupos marginales deberían incorporarse en el proceso de desarrollo bajo las condiciones existentes de producción a pequeña escala y que las personas involucradas deben participar activamente en el proceso, y hacerlo en su mismo centro. Éste es el punto central propuesto por Albert Hirschman en su contribución a la teoría y la práctica del desarrollo en la región. También es el tema de un libro escrito por Stiefel y Wolfe (1994). El libro sintetiza una amplia gama de experiencias con la participación popular en la región. En este renglón, Stiefel y Wolfe, como Hirschman, apuntan a la “decreciente capacidad del Estado para proveer servicios y reducir las desigualdades en el ingreso” que van acompañadas por una reducción similar en la “confianza pública en la legitimidad de sus esfuerzos”. Al unirse con los procesos de democratización política, no es de sorprender que la comunidad internacional esté “buscando la «participación» como un medio de hacer que sus proyectos de desarrollo funcionen mejor ayudando a la gente a subsistir... [y] como una dimensión indispensable de las políticas ambientales... que ya no puede ser evadida o pospuesta” (Stiefel y Wolfe, 1994: 19).

Este argumento de Stiefel y Wolfe es aceptado ahora ampliamente dentro de la comunidad internacional del desarrollo como un principio fundamental en lo que concierne a la puesta en práctica, supervisión y evaluación de los proyectos de desarrollo y del proceso de desarrollo más amplio. En este sentido, mucha de la literatura reciente ha enfatizado la multifacética contribución que la incorporación productiva de los grupos marginales puede hacer a la sociedad (Friedmann, 1992; Friedmann y Rangan, 1993; Stiefel y Wolfe, 1994). Mientras que se ha hecho muy poco en cuanto a las estrategias específicas para la sustentabilidad en las comunidades rurales pobres, es claro que gran parte de la experiencia en este ámbito realizada por practicantes con grupos de base (por ejemplo Glade y Reilly, 1993) corresponde con los principios enunciados por teóricos y analistas como Altieri (1987) y Barkin (capítulo 8 de este libro). En la mesa de discusión de estos estudios está el cómo incorporar a

de todas las empresas y unidades de producción, que incluye a aquéllas en el sector campesino y en la economía urbana informal, son tratadas como ineficientes y marginales y como tales se espera de ellas que sean presionadas y desaparezcan en el proceso de desarrollo.

estos grupos y comunidades marginales, en particular a aquellos que involucran a productores campesinos y a pueblos indígenas. Se necesita mucho más trabajo y estudio en esta área (para identificar las estrategias específicas que pudieran funcionar para asegurar el desarrollo sustentable de las comunidades marginales), pero el principio general es lo suficientemente claro: los grupos y comunidades marginales deben integrarse en los procesos (productivos y políticos) más grandes de los que son parte.

Korten y el desarrollo centrado en la gente

Un importante impulso para la búsqueda de una forma alternativa de desarrollo es el que aporta el foro de Desarrollo Centrado en la Gente (DCG). Los orígenes del foro DCG se remontan a marzo de 1987, cuando más de un centenar de miembros de ONG y otros profesionales del desarrollo de 42 países se reunieron en Londres para un simposio sobre “Alternativas de desarrollo”.

El marco básico para la aproximación del foro DCG ha sido elaborado por David Korten, miembro fundador y presidente, con 14 años de experiencia práctica en Asia, quien ha explorado alternativas al modelo dominante conducido por el Estado de desarrollo capitalista de libre mercado. El DCG intenta aportar una alternativa al paradigma de desarrollo centrado en la producción de la era industrial. Este paradigma todavía es dominante, según se hace evidente por el continuado énfasis en incrementar las tasas de crecimiento económico. Desde la perspectiva del DCG, la estrategia de la era industrial de maximizar la producción puede ser apropiada y efectiva para su época, pero ya está superada. Las realidades de hoy son las de una gran población mundial en crecimiento, cientos de miles de personas que viven en la extrema pobreza, disparidades extremas en la distribución de la riqueza y los ingresos, y una degradación ecológica creciente. Los nuevos problemas requieren de nuevas soluciones y el DCG se propone como un marco en esta dirección.

Desde la perspectiva del DCG, el crecimiento económico no es un requisito ni un resultado necesario del desarrollo. Los estándares de vida de la gente pobre y carente de poder han de mejorarse no a través de la tasa de producción sino por el cambio en los métodos de producción. Esto implica un cambio en el nivel comunitario desde la especialización y la integración hacia una economía mundial de diversidad y autosostenimiento. Esto implica también la formación de unidades más pequeñas, las que se prefieren no sólo porque conducen a forjar relaciones humanas, sino también porque son

consideradas más eficientes. También se requiere una descentralización concomitante con los sistemas político y económico, con el objeto de permitir a los individuos y comunidades tener más control sobre sus vidas. El éxito de estos métodos se mide en términos de crecimiento y bienestar humanos, de equidad y sustentabilidad.

La clave del DCG es la participación popular. En ésta, los miembros del foro DCG no sólo continuaron la discusión de la CEPAL sobre la necesidad de incorporar a las comunidades marginales en el proceso de desarrollo, sino que se mueven más allá de la CEPAL al insistir en la necesidad de situar a la gente en el centro del proceso. Aquí la participación es vista como un medio para lograr el desarrollo centrado en las personas, y como una de sus metas. Si la descentralización ha de ser más que la mera delegación de la autoridad formal en niveles inferiores, la gente debe ser capaz de participar en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Esto implica más que la sola consulta; requiere la integración de las personas en las estructuras de poder reales. Para que esto ocurra, la iniciativa debe venir desde abajo. En otras palabras, se debe responder a las demandas de los grupos comunitarios y las organizaciones cívicas para tener el control directo sobre los recursos locales y tener voz en los debates de las políticas nacionales.

La sustentabilidad ecológica es otro pilar central del DCG. El argumento es que al crear un vínculo entre el uso que las personas hacen de sus recursos y las consecuencias de ese uso, la gente estará menos inclinada a sostener prácticas destructivas. Por supuesto que la gente debe tener acceso suficiente a los recursos, el conocimiento y la tecnología apropiada, si ha de evitar la sobreexplotación de los recursos locales como fruto de su situación apremiante. El presupuesto y la experiencia del DCG es que, dada la oportunidad, la gente genera formas diversas e innovadoras para resolver los problemas específicos de la localidad y con ello complementar la diversidad inherente en la naturaleza y que es necesaria para preservar su salud.

DAMNE (Desarrollo Alternativo para Mujeres en una Nueva Era)
y el tema del género y el desarrollo

La búsqueda de un desarrollo alternativo condujo en los setenta a las ideas sobre la necesidad de incorporar a las mujeres, a los miembros de diversos grupos étnicos en desventaja o marginados, y a los pobres en general, en el proceso de desarrollo, e incluirlos como participantes activos y no como víctimas. Una de las primeras formulaciones de esta visión fue realizada por

Boserup (1970) basado en la perspectiva feminista liberal –las mujeres en el desarrollo (MED).⁴ Sin embargo, pronto se introdujo una perspectiva más radical. En esta perspectiva, los problemas del subdesarrollo y la marginalidad están basados en el patriarcado, un sistema opresor de dominio masculino y de subordinación femenina que se extiende desde las estructuras institucionalizadas de la economía mundial hasta el hogar (entre otros Sen y Grown, 1987; Beneria y Feldman, 1992).⁵ La solución de estos problemas, a los ojos de muchos académicos y promotores que comparten esta perspectiva, está en lograr la conciencia y las relaciones de solidaridad entre las mujeres, al igual que la acción colectiva contra los elementos opresores del sistema.

Una de las muchas respuestas significativas, desde los puntos de vista teórico y organizacional, a la necesidad ampliamente sentida de incorporar a las mujeres en el proceso de desarrollo a través de la acción colectiva directa de las mujeres mismas, fue la de DAMNE. Desde el principio y a lo largo de los años, DAMNE ha proporcionado un útil punto de referencia para una red de esfuerzos organizacionales que ahora se extiende a lo largo de la región al igual que importantes líneas de continuada investigación para las académicas feministas (véanse, entre otros, Beneria y Feldman, 1992; Bose y Acosta-Belén, 1995).

Préstamo y desarrollo para la microempresa (reducción de la pobreza en el nivel del hogar)

En los ochenta, en el contexto de pronunciados desarrollos mundiales, pero en particular en América Latina, una cantidad de organizaciones giró a la microempresa en el sector informal de las economías urbanas como agentes potenciales de desarrollo. No está claro cuál fue el ímpetu que estaba detrás de este giro en la teoría y la práctica del desarrollo. Como se discute en el capítulo 3, se relaciona en parte con la agenda de muchos gobiernos para liberarse de responsabilidades en los programas sociales y por reducir el Estado. Dentro de este contexto, algunos teóricos y promotores, de manera notable (en el contexto latinoamericano) Hernando de Soto, economista

⁴Una extensión contemporánea de esta perspectiva en América Latina puede encontrarse en Rao, Stuart y Kelleher (1999).

⁵Las variaciones en esta perspectiva radical condujeron a un serio debate dentro del movimiento feminista.

Esto de ninguna manera se ha solucionado, incluso al iniciar el siglo XXI. Entre los practicantes y académicos del desarrollo, la formulación dominante de esta perspectiva estaba en términos de género y desarrollo (GyD), según la cual el patriarcado no sólo permea las estructuras institucionalizadas del sistema capitalista dominante, sino también las relaciones entre hombres y mujeres en el nivel del hogar. El debate y la literatura que se suscitaron son demasiado voluminosos para citarse.

peruano, presidente del Instituto para la Libertad y la Democracia,⁶ vio un nuevo poder y recursos en los esfuerzos de muchos individuos y familias por establecer empresas en los márgenes del Estado, poder y recursos que, si se canalizan y promueven, podrían convertirse en un importante “motor de desarrollo”, para utilizar una metáfora común. Con referencia a ideas propuestas por De Soto y otros, los gobiernos y las agencias donadoras en todo el mundo iniciaron un importante programa de préstamos a la microempresa (entre otras la Fundación Carmeadow) que pronto se convirtió en la estrategia preferida para la mayoría de las agencias de desarrollo internacional (Otero y Rhyne, 1994).

La aproximación dominante al préstamo para la microempresa se basa en la noción de préstamo de solidaridad, y refiere a una experiencia ampliamente exitosa del Banco Graneen de Bangladesh. En esta experiencia, un grupo comunitario da el aval por los préstamos obtenidos por los empresarios individuales con lazos de solidaridad. El éxito del Banco Graneen –con una tasa de cartera vencida menor que la norma para los préstamos comerciales– y otras experiencias con el préstamo a la microempresa basado en la solidaridad lo ha convertido en un importante modelo de desarrollo.

Un segundo modelo diferente de préstamo de microempresa, y de empresariado, está asociado con la práctica de la AMAE, en Ahmedabad, India, a la vez una cooperativa y un sindicato de mujeres desempleadas. En vez de basarse en un grupo de solidaridad fomentado por el apoyo de donantes gubernamentales e internacionales, AMAE se ha sustentado en una forma cooperativa de organización y en un sindicato de mujeres empresarias desempleadas. La experiencia de AMAE ha sido ejemplar al generar condiciones y apoyo que han permitido a miles de mujeres desempleadas establecer actividades y empresas económicas sustentables. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, AMAE no ha sido un modelo en América Latina para el desarrollo micro o pequeño basado en la comunidad. En cambio, el modelo para este desarrollo –para una amplia gama de experiencias de los noventa– lo ha proporcionado De Soto y la aproximación del préstamo de solidaridad hacia el desarrollo (y formalización) de empresas en el sector informal.

Es difícil determinar qué tan exitosa ha sido esta aproximación ya que en el nivel macro se cuenta con poca evidencia. Una cantidad de estudios realizados por la OIT, sin embargo, sugiere que el sector no estructurado de las actividades y empresas económicas relativamente marginales, junto con sus

⁶Este centro (ILD) ha tenido una relación a largo plazo con el Centro para la Empresa Privada Internacional (Center for International Private Enterprise), con sede en Washington, el que comparte la ideología de derecha del ILD y su noción del sector privado como la solución al dilema del desarrollo.

mercados de mano de obra, han crecido a expensas de empresas formales más productivas (ORT, 1996). Esto se debe en parte al hecho de que el modelo neoliberal dominante del desarrollo conducido por el Estado, pero inclinado al mercado, se ha dirigido (y beneficiado) a un número relativamente pequeño de grandes empresas capitalistas en la región –alrededor del 10 por ciento del total– que han exhibido una capacidad de ajustarse e insertarse en el proceso de globalización. Otra categoría de empresas, que se calcula en 35 por ciento del total, y que tiene una capacidad productiva, ha sido minada por las políticas neoliberales que han empujado a una gran cantidad a la bancarota. En cuanto a aquellas empresas que operan en el sector informal o por campesinos en la sociedad rural, cuando menos la mitad de todas las empresas, se les ha dejado que se dobleguen a los vientos de las políticas neoliberales adoptadas prácticamente por todos los gobiernos en la región.

Desarrollo sustentable de base

Los conceptos de sustentabilidad y desarrollo sustentable surgieron en diversas publicaciones y foros en los setenta y ochenta, de manera más notoria en varios congresos organizados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUM). Con la publicación del reporte Bruntland –Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CNUME), 1997–, la cuestión de cómo combinar el crecimiento económico con la protección ambiental se situó en el centro de la agenda de desarrollo. Según lo vio la CNUME, la principal gestora para el logro del “desarrollo sustentable” sería la acción concertada de los gobiernos nacionales en el mundo para el apoyo de la Agenda 21, un plan de acción surgido de la Cumbre de Río en 1992. Sin embargo, para entonces ya se había hecho evidente que el desarrollo sustentable sólo podría lograrse con la acción comunitaria para promover un desarrollo social efectivo que fuera consistente con los requerimientos del equilibrio en el ecosistema al igual que la administración de recursos basada en la comunidad (Barkin, 2000). Para este fin fueron diseñados y ejecutados varios proyectos de desarrollo sustentable por parte de organizaciones no gubernamentales y basadas en la comunidad, con financiamiento del BM y agencias de ayuda bilaterales en los ricos países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).⁷ El abanico de los proyectos puestos en

⁷Es grande el número y amplio el alcance de los proyectos de desarrollo sustentable puestos en práctica a lo largo de los años, aunque hasta la fecha no hay una evaluación sistemática de sus resultados e impactos. No obstante, la literatura atingente es grande y sigue aumentando. Véase en particular Weaver, Rock y Kusterer (1996). Algunos elementos, que incluye esta literatura, que aportan una aproximación holista al desarrollo sustentable, son los de un modelo basado en un seguimiento y evaluación

práctica a lo largo de los años es amplio, pero estos proyectos han tendido a converger en los principios del etnodesarrollo, el ecoconocimiento indígena y la participación comunitaria en el desarrollo de proyectos y en la administración de los recursos (Bromley, 1994; Western y Wright, 1994). David Barkin, en el capítulo 8, aborda un tema central en estos proyectos: cómo construir comunidades sustentables con el apoyo de las bases dentro del contexto en el que las políticas y las instituciones neoliberales son dominantes. A este desafío responden actualmente por toda la región las organizaciones de base comunitarias en la forma de diversas luchas y estrategias para el desarrollo sustentable. La teoría de esta práctica, sin embargo, está todavía por construirse, aunque Barkin, en este volumen y en otros escritos, identifica algunos de sus elementos críticos.

La aproximación de las formas de vida sustentables (FVS)

En el cambio de milenio, el mundo está lejos de lograr la meta establecida para el año 2015 por las organizaciones internacionales involucradas en el desarrollo para reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza extrema, muchas de las cuales se localizan en las sociedades rurales. De hecho, este número en realidad se ha incrementado a lo largo de varias décadas en el pasado, del mismo modo que se ha ampliado la distancia en los ingresos y los estándares de vida. El aligeramiento, si no es que la reducción o la erradicación de la pobreza extrema, reconocido por el BM ya desde 1974 como el principal desafío que confrontaba la comunidad mundial de agencias y promotores del desarrollo, se situó en el centro de la nueva agenda de desarrollo establecida por estas agencias en 1990 (véase BM, 1990). No obstante, a pesar de una década de esfuerzos continuados y de diversas estrategias para tratarlo, el problema de la pobreza extrema continúa presente, como lo está el de la pobreza relativa –el número creciente de aquellos incapaces de resolver sus necesidades básicas. En respuesta a esta situación, y con referencia a las ideas propuestas por Chambers (1997), entre otros, y adoptadas por Carney (1993), el Departamento de Desarrollo del Reino Unido (DFID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Sociedad para

de diversos proyectos y un análisis de sus contextos social, cultural y político. Algunos elementos de la creciente literatura del desarrollo sustentable incluyen la relación entre las bases y los procesos de formación de políticas que con frecuencia están involucradas en la práctica. Sobre esto véase Blauert y Zadek (1998).

el Desarrollo Internacional (SID) han comenzado a defender una nueva “aproximación de formas de vida sustentables” hacia el desarrollo rural.⁸

La esencia de la aproximación de las formas de vida sustentables (FVS) reside en situar el desarrollo local basado en la comunidad dentro del contexto de las condiciones creadas por estructuras (ámbitos de gobierno, sector privado, etcétera) y procesos (políticas, instituciones, etcétera) “externos”. Dentro de este contexto, el foco del análisis y la acción se da en el impacto de estas estructuras y procesos sobre los “recursos de formas de vida” (*livelihood assets*) de la comunidad: su capacidad para generar capital financiero, social, humano, natural y físico (Liamzon *et al.*, 1996). Otra preocupación de las FVS es identificar las formas de acción que sean capaces de minimizar los efectos negativos de los procesos externos y transformarlos. En relación con ello, se ha puesto atención en las “asociaciones” –grupos de productores, cooperativas y organizaciones basadas en la comunidad de diversos tipos. La razón para este enfoque es que el estudio de muchos experimentos con el desarrollo local en todo el mundo ha conducido al análisis de tales asociaciones como poseedoras del mayor potencial para lograr la apropiación colectiva o social del poder, un proceso en el que los individuos y grupos dentro de una comunidad han aprendido a interactuar entre sí de manera constructiva, cooperar para un objetivo común (identificando y abordando sus problemas) y a realizar la acción colectiva necesaria para la transformación social y el desarrollo económico. En las diversas dimensiones de las FVS, la formulación más reciente de DA, véase, entre otros, Amalric y Banuri (1995); Chambers (1997); Liamzon *et al.* (1996); y Development (1998).

El contexto histórico para el desarrollo local y comunitario en América Latina

El desarrollo comunitario o local tiene una larga historia tanto en América Latina como en otras partes. De hecho, antecedió por décadas la búsqueda de un desarrollo alternativo iniciada en 1974 por la fundación Dag Hammarsköld (véase la revista *Development Dialogue*) y promovida por IINUDS y otras organizaciones internacionales como la SID. Anticipó también la preocupación por el desarrollo sustentable expresada por CNUME y por el reporte Bruntland.

En los sesenta, un modelo muy particular de desarrollo comunitario se promovió en América Latina a través de la Alianza para el Progreso (Alpro)

⁸El crecimiento y difusión de esta aproximación entre los sociólogos se refleja en el tema “Modos de vida rural sustentables” del Décimo Congreso Mundial de Sociología en Río de Janeiro, del 30 de julio al 5 de agosto de 2000.

como un medio de contrarrestar el efecto de demostración de la Revolución cubana. Bajo los auspicios de la Alpro, la responsabilidad primaria del proyecto de desarrollo se le dio a lo que más tarde, en los ochenta, sería concebido como la “sociedad civil”, un conglomerado de organizaciones basadas en la comunidad que incluía a iglesias, grupos universitarios y los programas de extensión de asistencia rural apoyados por el gobierno y financiados externamente que estuvieron en el centro del “movimiento del desarrollo comunitario” y su bien financiado programa para el desarrollo rural integral (DRI), el modelo básico para el desarrollo rural en los setenta (sobre el DRI, véase, entre otros, Honadle y Van Sant, 1985)

En los setenta, en un contexto intelectual diferente –la aproximación de las necesidades básicas y de la reforma liberal, la principal alternativa de la corriente dominante presentada ante la demanda radical de cambio revolucionario– surgieron varios llamados al DA. Estaba a discusión la forma de desarrollo que fuera conducida por la gente, humana (pequeña) en escala, participativa en la forma y que respondiera a la movilización social desde abajo. En este nuevo contexto, el desarrollo comunitario y local se convirtió en un asunto de sobrevivencia y de logro de la autosuficiencia, más que de desarrollo en sí mismo. En cuanto al contexto político, el principal desarrollo en la década fue un movimiento centrado en movilizar a las clases trabajadoras y medidas para incorporarlas en el proceso político e incrementar su nivel de participación en el proceso de desarrollo económico. En este contexto la principal agencia para el desarrollo comunitario de la época fue el Estado con un conjunto de instituciones políticas que operaba como un instrumento cautivo de la oligarquía y la burguesía, una amalgama de capitalistas comerciales, financieros e industriales. Uno de los desarrollos políticos más significativos en esta área fue el golpe militar, en 1973, encabezado por Augusto Pinochet en contra del gobierno socialista democráticamente electo de Salvador Allende, y los subsecuentes 17 años de gobierno militar. Resulta que 1973 fue también punto de inflexión en la guerra de clases generada en Europa por el capital en contra del trabajo.⁹ En Chile, el régimen de Pinochet lanzó lo que fue visto por uno de los arquitectos del PAE del BM como “las reformas de alcances más radicales de la historia”. Este régimen no sólo fue el pionero en el experimento mundial de las reformas neoliberales (liberalización, desregulación y privatización), sino que adoptó medidas específicas para

⁹El año de 1968 representó el punto máximo y la última ofensiva de importancia del trabajo mundial en su lucha por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo. En 1973, en medio de una crisis sistémica, el capital devolvió el golpe y lanzó una contraofensiva que se extendió hasta la última década del milenio. Sobre la dinámica de esta guerra de clases, véase, entre otros, Crouch y Pizzorno (1978).

descentralizar el gobierno, reducir su papel en la economía y girar hacia una forma de desarrollo económico más descentralizada y basada en la comunidad. En relación con ello, Pinochet propuso “enseñar al mundo una lección de democracia”. Y efectivamente lo ha hecho, en el sentido de que sus experimentos con el cambio institucional llegaron a ser un importante centro de referencia para las reformas “estructurales” que se introdujeron y se pusieron en práctica ampliamente en la región y en el mundo en el curso de las siguientes dos décadas.

La contribución del régimen chileno de Pinochet al proceso de desarrollo descentralizado basado en la comunidad tuvo tres aspectos. Primero, en 1976, apenas a los 2 años de iniciados su gobierno y administración dictatoriales, Pinochet estableció la Corporación para la Reforma Administrativa, que trasladaba ciertas funciones del gobierno central a las regiones y municipalidades. La base de esta reforma fue fijada en una Declaración de Principios realizada en marzo de 1974. Incluyó la declaración de que “el punto esencial del nuevo establecimiento es la descentralización del poder”; no sólo el “poder político” (para decidir asuntos de interés general para la nación) sino también el “poder social” (“poder para los cuerpos intermedios de la sociedad para que se desarrollen legítimamente con el objeto de cumplir sus propios objetivos específicos”). Segundo, una mayor eficiencia y efectividad en la puesta en práctica de las políticas. En relación con ello, se argumentó que la descentralización de programas sociales sensibles permitiría a los gobiernos responder mejor y adaptar sus políticas a las diferencias en las realidades locales al igual que a crear rutas de participación popular tanto en la identificación de las necesidades y decisiones como para distribuir los recursos dirigidos a las comunidades. Esta aproximación y las reformas asociadas se convirtieron en un modelo para la estrategia de sociedad del BM que se realizó con gran fanfarria en los ochenta, al igual que para la nueva política social (NPS) orientada a la pobreza, introducida por el gobierno boliviano en 1985 y por otros gobiernos en la región desde entonces (véase el capítulo 2 para una revisión de esta NPS y el capítulo 4 para el caso de Bolivia). Tercero, la acción social para las organizaciones de base, con el apoyo de las ONG, condujo a una mayor participación local en la toma de decisiones que afectan a la gente en sus comunidades, para ayudarles a confrontar las condiciones de una crisis generalizada y enfrentar sus necesidades comunes (Razeto, 1985; Tetelboin, 1992).

En los ochenta, haciendo referencia al experimento neoliberal de Chile, la búsqueda del desarrollo local basado en la comunidad fue promovida ampliamente como la mejor alternativa a la aproximación de conducción del Estado y orientada al mercado que defendían los gobiernos, el BM y otras organizaciones internacionales. Las principales agencias para esta estrategia fueron

la mirada de grupos locales, asociaciones voluntarias y ONG formadas en lo que se concibió en esa época como el “tercer sector”. El contexto teórico para el desarrollo alternativo promovido por estas organizaciones fue el que Toye (1987) denominó una “contrarrevolución” en la teoría y en la práctica: una aproximación que privilegiaba al libre mercado como el medio más eficiente de distribuir recursos a través del sistema y traer consigo el desarrollo económico.

El contexto político para este contradesarrollo se formó por un conjunto de tendencias discernibles:

- una propensión hacia la crisis que se manifestaba en una incapacidad para el servicio de las deudas externas, una inflación rampante, crecientes déficit en las cuentas corrientes y los presupuestos de los gobiernos, y una caída en los niveles de formación de capital existentes hasta el momento;
- una descapitalización de la industria y el crecimiento y florecimiento de un sector informal compuesto de microempresas que se caracterizaban por una baja productividad, falta de capital, irregularidad en sus operaciones y falta de regulación social;
- un proceso de ajuste estructural, la liberalización de los mercados, la desregulación de la actividad del sector privado y la privatización de las empresas estatales y las propiedades públicas;
- la redemocratización, proceso manifiesto en una amplia tendencia hacia la descentralización, al igual que hacia la restauración de los regímenes civiles constitucionales y la proliferación de las ONG, las que eran tomadas por los donantes internacionales y los gobiernos como socias estratégicas en el proceso de desarrollo, como intermediarias frente a las organizaciones de base y los pobres.¹⁰

La década de los noventa vio otro cambio discernible en el pensamiento y la práctica del desarrollo, esta vez en la dirección de consolidar al NME de la estabilización y de las medidas de ajuste estructural. El problema con

¹⁰No todas las ONG pueden verse como intermediarias, mediadoras entre la base y las agencias externas de financiamiento y de diseño de políticas. Algunas ONG son propiedad del gobierno (GONGO: Government Owned Non Government Organizations); otras tienen un interés de negocios (BINGO: Business Interest Non Government Organizations) y muchas otras trabajan en el interés público (PINGO: Public Interest Non Government Organizations). En este volumen, sin embargo, el término ONG se utiliza en un sentido más restringido para referir a las organizaciones de intermediación que son parte de lo que solía llamarse “el tercer sector”, pero que para la década de los noventa, en el discurso del desarrollo, tanto oficial como no oficial, se ha visto como “sociedad civil”. Las ONG de este tipo, aunque con frecuencia acordes con el Banco Mundial y ocupando el papel de una institución social, por lo general son parte del movimiento popular, el que, en el contexto actual de la globalización, se ha tornado global en su alcance.

este modelo es que tendía a profundizar el abismo del desarrollo y se apoyaba de manera desproporcionada sobre los pobres y otros grupos y categorías vulnerables de la población. Para abordar este problema, el modelo fue rediseñado de modo que se diera al ajuste estructural una dimensión social y a todo el proceso una cara humana (sobre esta “nueva comprensión”, véase *Finance and Development* del FMI, diciembre de 1992).

La CEPAL (1990) fue una de tantas organizaciones que promovieron un modelo para este desarrollo social, el liberalismo social. Una clave para este modelo fue un incremento en la “participación” popular, percibida como el “eslabón perdido” entre la “transformación productiva” (conversión tecnológica del aparato de producción para ayudarlo a ajustarse a los requerimientos cambiantes de la economía global) y “equidad” (un acceso más equitativo a los recursos productivos de la sociedad). Otra característica de este nuevo modelo de liberalismo social, orientado como lo estaba sobre todo a aligerar la pobreza, era la del “fortalecimiento de la sociedad civil”. En vez de confiar en que las ONG mediarían con las bases y ejecutarían los proyectos de desarrollo, se dirigió la atención hacia estas organizaciones de base, muchas de las cuales, como organizaciones altamente informales, carecían de la capacidad institucional que se había demandado a las ONG. El fortalecimiento de la sociedad civil se convirtió en la base, y en el objeto, de una forma de desarrollo que no sólo simpatizaba con el mercado –basada en una aproximación más equilibrada hacia el papel del Estado y del mercado–, sino que también era participativa y promotora del uso del poder (*empowering*). El principal requerimiento institucional de esta forma de desarrollo local, dirigido a la comunidad, fue la descentralización de los servicios del gobierno y los incrementos en las responsabilidades asumidas por los gobiernos locales municipales. Los capítulos 3, 4, y 5 abundan en la dinámica de este proceso, en particular en cuanto a su relación con las experiencias de Bolivia y Chile.

La dinámica del desarrollo local y comunitario

El concepto de comunidad

En su famoso tratado, Tönnies (1963) hace una distinción conceptual entre *gemeinschaft* (comunidad), en donde las relaciones sociales se caracterizan por vínculos sociales orgánicos no contractuales y en donde los individuos están ligados por un sentido de mutua obligación e identidad social, frente a *gesellschaft* (sociedad), en donde las relaciones sociales se caracterizan por

lazos de asociación externa o formal y donde los individuos están ligados sólo por la conveniencia y una mutualidad o cálculo racional de los intereses compartidos. Con esta distinción, Tönnies da otro giro a una larga tradición de análisis y teoría sociológicos relacionados con el tema de la pérdida de la comunidad bajo el impacto de las fuerzas de la modernización, la industria y la ciencia, las cuales se manifiestan en el urbanismo, industrialismo, racionalismo, secularización, materialismo, mercantilización e individualismo.

En esta tradición, el análisis social se ha dividido y permanece así, entre aquellos que ven la referencia a la comunidad como nostalgia por un pasado que no puede ser revivido o la proyección de un ideal utópico, y aquellos que la ven como una condición social indispensable del desarrollo. La historia del desarrollo en el periodo de la posguerra, en los niveles tanto de la teoría como de la práctica, refleja esta división. En el nivel de la práctica (o de la prescripción de políticas), el desarrollo basado en la comunidad –o dirigido a la comunidad–, el movimiento de desarrollo de la comunidad, ha tenido una variopinta pero larga historia, surgiendo o debilitándose aquí y allá, resurgiendo o refiriéndose en diferentes formas, lugares y contextos. En cada una de las 5 décadas pasadas que constituyeron el desarrollo como un campo de estudio, tanto la teoría como la práctica se han centrado en los papeles relativos y correspondientes del Estado y del mercado, asignando diferentes pesos y valores a cada uno. Sin embargo, el concepto de “comunidad” ha persistido a lo largo de estos procesos colaterales y como tal es un centro de referencia primordial para la búsqueda hoy ubicua y mundial de un DA.

En el contexto de esta búsqueda y del movimiento asociado con ella, el concepto de comunidad está entrelazado con una serie de otros conceptos como el de “sociedad civil”, “la base”, “local” y “participación popular” para formar un discurso teórico –y político– consistente de apoyo al DA en una forma u otra. Sin embargo, hay varias limitaciones en este discurso, que se discuten en diversos capítulos. Una de ellas es que la referencia persistente al concepto de comunidad sirve para distraer la atención e ignorar las divisiones internas de clase y las fuerzas estructurales que operan sobre los individuos en este nivel, limitando su acción en aspectos y formas significativos. En el capítulo 2 se explora este tema con cierta profundidad.

El término “local” es utilizado frecuentemente en el contexto de instituir una forma de desarrollo que sea conducida por el pueblo y participativa, al igual que la posibilidad de regresar a formas sociales preferibles en las que los valores comunitarios del asentamiento rural son revividos y revalidados y en donde se les da libre juego a las normas sociales y valores culturales más

diversos y heterogéneos. Aquí lo local se contrapone con lo global, un nivel de desarrollo en el que no hay posibilidad de participación popular; no hay un sentido o espíritu de comunidad; un ámbito de objetividad en donde las estructuras y procesos de un sistema que abarca todo se ven operar en vez de las acciones pensadas e intencionales de los individuos. Esta diferencia en el contexto es crucial. Las dinámicas del cambio y del desarrollo son radicalmente diferentes. Mientras que los sistemas “funcionan” u “operan” (sobre pueblos y países dependiendo de su posición), los individuos actúan y sólo pueden hacerlo de manera efectiva en un nivel al que pueden ser capacitados y dotados de poder, capaces de actuar colectivamente y generar las fuerzas sociales necesarias para realizar el cambio y traer consigo las condiciones de su desarrollo. La dinámica de estas fuerzas se explora en varios capítulos más adelante.

La deconstrucción del discurso del desarrollo local basado en la comunidad

El capítulo 2 explora una dimensión crítica del proceso de desarrollo de la comunidad que hace prácticamente en todas las escuelas de pensamiento mencionadas: la dinámica interna de las fuerzas generadas por las divisiones de clase dentro de las comunidades humanas. En este sentido, el capítulo proporciona un marco de ideas para un análisis alternativo del proceso de desarrollo en el nivel de las comunidades humanas. Es sorprendente cuán pobremente el concepto de utilidad es definido y utilizado tanto en el estudio del desarrollo de la comunidad como en su práctica. El concepto de comunidad implica un conjunto de concepciones comunes, vínculos sociales de obligación mutua, al igual que prácticas institucionalizadas compartidas. En este sentido, claramente es más difícil construir una “comunidad” bajo algunas condiciones que bajo otras. En la sociedad rural prevalece más el sentido de comunidad que en los centros urbanos, o ciudades, donde el sentido de comunidad y, a veces, una verdadera “comunidad” operativa puede constituirse en el nivel de las asociaciones de vecindad y de las instituciones locales. En muchos casos de desarrollo de la comunidad, sin embargo, no hay una “comunidad” real –real o imaginada. El término “comunidad” en la práctica denota con frecuencia una unidad limitada de personas que se relacionan simplemente por comodidad administrativa o analítica o por contigüidad geográfica. En muchos casos, sin embargo, las personas involucradas –o que son el blanco de proyectos y programas de desarrollo de la comunidad– están divididas a lo largo de las líneas de clase y estratificadas a lo largo de diver-

sas dimensiones. Como resultado, tanto en la práctica como en el análisis, la noción de comunidad no es sólo altamente problemática, sino que es difícil, o imposible, de traducir sea a la teoría o a la práctica. Veltmeyer explora aquí algunas dinámicas de este problema.

El capítulo 3 se enfoca en la tendencia regional (efectivamente mundial) hacia la descentralización del gobierno. La bibliografía de este volumen ilustra la gama de temas implicados en un análisis de esta tendencia. La tendencia misma es entendida y presentada como un mecanismo para asegurar un proceso más participativo de desarrollo económico. En el análisis proporcionado en el capítulo 3 hay una cantidad de agendas en conflicto (o en convergencia) implicadas en este proceso de descentralización. Estas agendas necesitan ser deconstruidas –y lo son– por su significado político.

Los capítulos del 4 al 7 aportan un conjunto de estudios de caso de la diversa y compleja dinámica de los procesos de desarrollo asociados con la búsqueda de una forma alternativa de desarrollo. En el capítulo 4, el énfasis se da en una serie de iniciativas y cambios institucionales que han sido diseñados por el gobierno boliviano para lograr los objetivos de reducir las condiciones de extrema pobreza e inducir a una forma más participativa de desarrollo. Las dos piedras de toque de estas políticas fueron:

- la institución, en 1968, de una NPS que, se argumenta, es “la más ambiciosa y de mayor alcance en América Latina” (Gleich, 1999: 135); y
- la promulgación, en 1994, de la Ley de Participación Popular, y, en 1995, de la Ley de Descentralización Administrativa.

Estas dos leyes, junto con la NPS, establecieron los cimientos para una serie de experiencias tanto en Bolivia como en otros lugares con la participación popular en el proceso de planeación del desarrollo y en la descentralización de la toma de decisiones fiscales. El experimento altamente exitoso –que continúa aún, 9 años hasta la fecha– de parte del gobierno de la ciudad de Porto Alegre en Río Grande do Sul, Brasil, con su “proceso participativo de diseño de presupuesto”, en cierto grado puede ser vinculado con estas iniciativas “desde arriba” en Bolivia.¹¹

El capítulo 5 da un giro hacia Chile y los esfuerzos del último régimen democrático, y del actual, por instituir un programa de medidas de políticas diseñadas como medio para reducir y aligerar la pobreza que sufren alrededor de dos de cada cinco chilenos. El centro de estos esfuerzos es la región BíoBío, una de las zonas más pobres en el país, con un alta concentración de

¹¹Sobre este experimento de modelo de desarrollo local participativo, véase, en particular, Neaera Abers (2000).

pueblos indígenas, en los márgenes de la segunda ciudad más grande del país y uno de los mayores “polos de crecimiento” del país. Una vez más, la iniciativa principal en esta serie de esfuerzos por instituir una forma de desarrollo dirigida por la comunidad se da desde adentro del gobierno, o “desde arriba”. Esta iniciativa se toma como un modelo a seguir por otros países, de parte de los promotores del desarrollo en la región y de la comunidad de éstos en el mundo. De ahí que la dinámica de su diseño y puesta en práctica merezcan una mirada de cerca. Eduardo Aquevedo, sociólogo que trabaja en la Universidad de Concepción, nos proporciona esta mirada, dándonos con ello una perspectiva de la dinámica de un programa de descentralización iniciado por el gobierno para el desarrollo dirigido por la comunidad orientado a la pobreza.

En el capítulo 6, se llama la atención de los lectores acerca del caso de Costa Rica, lo que aporta un contexto para explorar el discurso actual y dominante sobre la participación popular y el desarrollo participativo. Como ha observado Escobar, sociólogo colombiano que escribe en la tradición emergente del modernismo del posdesarrollo, muchas de las limitaciones implicadas en los esfuerzos por instituir una forma participativa de desarrollo pueden ser rastreadas en los problemas que se dan en la manera en que el desarrollo es concebido, y cómo se escribe y se piensa acerca de él; esto es, en la forma del discurso involucrado. Escobar (1997) aborda aquí un tema altamente debatido que ha sido puesto en la agenda por los defensores de una posición posestructuralista (y posmoderna) de desarrollo. Aun cuando no aborda este tema en los términos delimitados por estos analistas y teóricos, MacDonald plantea serias cuestiones acerca de la práctica de las ONG del desarrollo participativo al igual que del discurso asociado con éste. Uno de los principales puntos que ella plantea es que, en el contexto de una difundida ingenuidad con respecto a las ONG como inherentemente participativas, no debe rechazarse sino recuperarse la noción de “desarrollo participativo”.

En el capítulo 7, Aquiles Montoya aborda el proceso del desarrollo participativo basado en la comunidad en El Salvador. A lo largo de los ochenta, la década que dio lugar a amplios y multifacéticos experimentos en el desarrollo local y basado en la comunidad en toda la región, El Salvador fue diezmado por una guerra civil y de clases que hizo que el desarrollo local basado en la comunidad fuera a la vez difícil y necesario. En los noventa, en el contexto de un acuerdo de paz firmado por las partes en conflicto, han cambiado las condiciones para esta forma de desarrollo, aunque sólo en algunos aspectos pero no en otros. Montoya reporta aquí un gran número de experimentos de desarrollo basado en la comunidad en estos contextos cambiantes, y obtiene

conclusiones del proceso implicado. Una conclusión es que están implícitos no sólo los temas del liderazgo y la ideología, de organización interna y apoyo externo, el acceso a recursos, la gestión y una estrategia viable, sino también una comprensión de cómo las fuerzas y las estructuras externas inciden en la comunidad. Los capítulos escritos por Barkin y Veltmeyer hacen el mismo señalamiento. Desgraciadamente es difícil identificar un conjunto de condiciones que se apliquen en diversos contextos. No obstante, Montoya presenta los resultados de un amplio estudio cuantitativo de 100 comunidades campesinas salvadoreñas que han estado practicando el CED durante los últimos 10 o 15 años. Este estudio considera un amplio rango de factores que incluyen, por ejemplo, la tenencia de la tierra, la actividad económica, la infraestructura, el ambiente y el apoyo financiero externo, los que son críticos para los esfuerzos de desarrollo comunitario en todas partes. Con referencia a estos indicadores, Montoya concluye que aunque estas comunidades están teniendo éxito para superar las condiciones de pobreza y marginación, “esta situación debe consolidarse con el objeto de lograr su potencial y reproducirse a gran escala”. Presenta 17 reflexiones como conclusión.

En el capítulo 8, David Barkin apunta un asunto crítico implícito en el proceso de desarrollo basado en la comunidad: cómo sostener, tanto en términos ambientales como sociales y económicos, las comunidades que se encuentran en la base del proceso de desarrollo –cómo construir comunidades sustentables. Con este complejo tema en mente, Barkin revisa tanto la teoría como la práctica en el contexto del desarrollo en México. Su conclusión general es que el modelo neoliberal es ecológicamente insustentable y que opera en contra del desarrollo comunitario en las áreas rurales. Este modelo necesita entonces ser reemplazado por uno que permita a las comunidades en las áreas rurales “el recibir apoyo del resto de la nación para poner en práctica un programa regional de desarrollo alternativo”.

En el nivel de la comunidad, el nuevo modelo estaría caracterizado por la diversidad y la autosuficiencia (en oposición a la especialización y la integración en el mercado mundial), la sustentabilidad ecológica, la autonomía, la participación popular (en la planeación y la puesta en práctica) y el control local sobre los recursos locales. Algunas de las estrategias que practican las comunidades locales a este respecto y los mecanismos que desarrollan son exploradas por Barkin (2000) en parte de su trabajo reciente.

En el capítulo final, O'Malley reflexiona sobre la posibilidad, o el futuro probable, del desarrollo basado en la comunidad (DBC). En la primera parte, O'Malley ofrece un discurso teórico sobre el concepto de “comunidad”, una serie de reflexiones en el discurso posmodernista que en años recientes han

influido la manera en que el desarrollo comunitario ha sido pensado y practicado. Rastrea las largas raíces históricas de la noción de comunidad según se relaciona con el proceso de desarrollo. En relación con ello, O'Malley contrapone el idealismo y el romanticismo de la aproximación posmodernista con diversas formas realistas de análisis estructural que han dominado el estudio del desarrollo a lo largo de los años.

En la segunda parte de sus reflexiones concluyentes, O'Malley toma como tema clave cómo el DBC es concebido y puesto en práctica, como un medio o como un fin. Al reflexionar sobre la compleja dinámica del proceso implicado concluye que el DBC tiene un futuro pero de ninguna manera está garantizado. Entre otras cosas, requiere de una construcción activa que tome en cuenta las condiciones estructurales y coyunturales de su gestión. A este respecto, en la tercera parte, O'Malley regresa y expande varios de los puntos señalados ya en el capítulo 2 frente a la dinámica de clase intra e intercomunitaria. Cerramos así el círculo retornando a las ideas presentadas como el hilo conductor de varios de los estudios sobre el desarrollo comunitario presentados en este volumen.